



EJECUTANTE:	Luis Antonio Isaza Gómez
EJECUTADA:	Patrimonio Autónomo del Remanente Instituto de Seguro Social Liquidado
TIPO DE PROCESO	Ejecutivo Laboral
DECISIÓN:	Dejar sin efecto
RADICADO Y LINK:	050013105-007-2022-00329-01 (353) 05001310500720220032901

En la ciudad de Medellín, a los ocho (08) días de marzo de dos mil veintitrés (2023), la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas Luz Amparo Gómez Aristizábal, María Eugenia Gómez Velásquez y Claudia Angélica Martínez Castillo como ponente, se reunió para resolver el recurso de apelación interpuesto por el ejecutante contra el auto proferido el 24 de noviembre de 2022, mediante el cual el juzgado de instancia declaró probada la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia y, ordenó remitir el proceso de la referencia al Ministerio de Salud y Protección Social.

La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por la Ponente, el cual se traduce en la siguiente decisión:

I. ANTECEDENTES

El señor Luis Antonio Isaza Gómez presentó demanda ejecutiva laboral, a continuación del proceso ordinario, en contra del Patrimonio Autónomo del Remanente Instituto de Seguro Social Liquidado, con el fin de que el juzgado de primera instancia librara mandamiento de pago por todos conceptos reconocidos en la sentencia del 3 de octubre de 2018, proferida en primera instancia y confirmada por la ala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, mediante decisión del 6 de marzo de 2020 (Fl. 238 – 242 y 252 – 253 del Archivo 01 expediente ordinario).

En la sentencia cuya ejecución se persigue, el juzgado de primera instancia ordenó:

SEGUNDO: En consecuencia, se CONDENA al PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES LIQUIDADO, representado por la FIDUAGRARIA S.A., administradora y vocera del P.A.R.I.S.S., a pagar al demandante, por concepto de prima de navidad, por el año 2014, periodo 7 de julio del 2014 al 31 de diciembre de 2014, la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROSCIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$1.924.419,00), por concepto de prima de navidad por el año 2015, periodo 1° de enero de 2015 al 31 de marzo de 2015, la suma de UN MILLÓN TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$1.037.571,00).

TERCERO: Se CONDENA al PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES LIQUIDADO, representado por la FIDUAGRARIA S.A., administradora y vocera del P.A.R.I.S.S. a reconocer al demandante la INDEXACIÓN, sobre la suma objeto de condena por concepto de prima de navidad, para lo cual aplicará el IPC certificado por el Dane y la fórmula aprobada por la Corte Suprema de Justicia, según la cual, indexación es igual al índice final dividido índice inicial, por valor a indexar menos valor a indexar, donde el índice final es el IPC de la fecha del pago, el índice inicial es el IPC de la fecha en que se causó el derecho y el valor a indexar corresponde al monto de la prima de navidad de cada período". (Archivo 01 Carpeta Ordinario Archivo 02. fl. 191).

II. CONSIDERACIONES

Estando el proceso para resolver de fondo el recurso, la Sala se percata que en este caso es necesario revisar lo referente a la competencia de los Jueces Laborales del Circuito, por el factor cuantía, por cuanto el artículo 12 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 46 de la Ley 1395 de 2010, señala:

(...) Los jueces laborales de circuito conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía no exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente, y en primera instancia de todos los demás".

Como la mencionada normatividad resulta aplicable a todos los trámites procesales regulados en dicho compendio, que no tengan estipulada una norma especial sobre la cuantía, incluido el proceso ejecutivo.

Siendo ello así y como el procedimiento laboral no tiene una norma expresa que regule lo relativo a la determinación de la cuantía en el proceso ejecutivo laboral, nos remitiremos por integración analógica, según lo autoriza el artículo 145 del CPTSS, nos remitiremos al artículo 26 del Código General del Proceso, que establece para la determinación de la cuantía del proceso, se debe tener en cuenta el valor de todas las pretensiones al momento de la presentación de la demanda,

sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a su presentación.

En el asunto bajo análisis, si bien la demanda ejecutiva se promovió para obtener el pago de la condena impuesta en sentencia judicial, la competencia para conocer de la respectiva ejecución la conserva el Juez que profirió la sentencia, esto es, el Juzgado 7 Laboral del Circuito de Medellín, lo cual no es óbice para que, aun tratándose de un proceso de ejecución con base en sentencia judicial, se deba tener en cuenta, al momento de presentación de la demanda para impartirle el trámite de rigor, el factor cuantía regulado por el artículo 20 del CPTSS.

Con otras palabras, el proceso ejecutivo laboral seguido a continuación del ordinario y con el cual se persigue el cobro de las sumas objeto de las condenas, también queda sujeto a las reglas de determinación de la competencia por el factor cuantía, de allí que, en caso de que estas no superen los 20 SMLMV, el trámite del proceso ejecutivo a continuación sería, ante el mismo juez que conoció del ordinario, pero en única instancia, es decir sin lugar a alzada.

No se puede dejar de lado, que el proceso ejecutivo a continuación del ordinario es un nuevo proceso, sin que pueda entenderse como una extensión del juicio declarativo, pues en él proceden excepciones, nulidades propias y demás circunstancias jurídicas características de un proceso autónomo.

El asunto fue objeto de análisis por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, esa corporación en sentencia SLT6155 de 2018, en la que estudió un asunto de idénticas características al que ahora se somete a nuestra consideración, señaló:

Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que si bien en el trámite cuestionado se tenía como títulos las sentencias judiciales originadas dentro de un proceso ordinario laboral de primera instancia, lo cierto es que en el proceso ejecutivo se buscaba el pago únicamente de las agencias en derecho, las cuales equivalían a \$2.910.610 y en este sentido, no excedían los 20 SMLMV, aunado a que desde la ejecutoria de las sentencias y la solicitud de ejecución, transcurrieron más de 3 años.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 12 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social establece que *«Los jueces laborales de circuito conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente, y en primera instancia de todos los demás»* y en este sentido, sobre el recurso de apelación, el artículo 65 dispone que:

Son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

- 1. El que rechace la demanda o su reforma y el que las dé por no contestada.*
- 2. El que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros.*
- 3. El que decida sobre excepciones previas.*
- 4. El que niegue el decreto o la práctica de una prueba.*
- 5. El que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida.*
- 6. El que decida sobre nulidades procesales.*
- 7. El que decida sobre medidas cautelares.*
- 8. El que decida sobre el mandamiento de pago.*
- 9. El que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo.*
- 10. El que resuelva sobre la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo.*
- 11. El que resuelva la objeción a la liquidación de las costas respecto de las agencias en derecho.*
- 12. Los demás que señale la ley.*

[...]

En este orden de ideas, para que un auto sea apelable debe darse dentro de un trámite de primera instancia, de suerte que, al no ser este uno de aquellos, acertó el Tribunal cuando declaró improcedente el recurso de apelación, pues tal y como se dejó expuesto, el proceso ejecutivo objeto del reproche, correspondía a uno de única instancia.

Así las cosas, concluye la Sala que el defecto imputado por la parte accionante no existió, toda vez que la providencia cuestionada se encuentra edificada en reflexiones que consultan las reglas mínimas de razonabilidad jurídica, impidiendo al juez de tutela interferir invocando una mejor interpretación del asunto.

Así las cosas, comoquiera que se había admitido el recurso, atendiendo las consideraciones antes expuestas, en virtud del control de legalidad contemplado en el art. 132 del CGP, aplicable por analogía del art. 145 del CPT SS, por tratarse de un asunto de única instancia en razón a su cuantía, se procede a dejar sin efecto el auto calendado enero 23 de 2023, para en su lugar inadmitir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutante contra el auto proferido por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín fechado noviembre 24 de 2022, en armonía con los argumentos antes expuestos.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

I. DECIDE:

PRIMERO: Dejar sin efecto el auto calendado enero 23 de 2023, para en su lugar inadmitir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutante contra el auto proferido por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín fechado noviembre 24 de 2022, en armonía con los argumentos antes expuestos.

SEGUNDO: Disponer la devolución del expediente al juzgado de origen.

Lo resuelto se notifica en ESTADOS.

Las Magistradas



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE
CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N° 041
del 09 de marzo de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>